

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA**

**CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
EXPEDIENTE No. 2020 – 00407**

Bogotá D. C., quince de marzo de dos mil veintiuno.

Ingresa al Despacho la **CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL** celebrada entre el apoderado de la Señora **LUCINDA MORALES DE LOSADA** y el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**, para verificar el cumplimiento de los requisitos y la legalidad de la misma. Previa referencia de los antecedentes que motivaron el acuerdo conciliatorio,

I. ANTECEDENTES:

Solicitud de Conciliación:

El objeto de la presente conciliación busca obtener el reconocimiento y pago efectivo de todos y cada uno de los valores que componen la asignación de retiro por sobrevivencia a la actora previamente reconocida, toda vez que según esta se dejaron de incrementar, desconociendo el principio de oscilación, desde la fecha del reconocimiento de sus derechos prestacionales y hasta la fecha de presentación de esta solicitud.

Hechos:

1. Que el artículo 56 del Decreto 1091 de 1995 contempló el principio de oscilación para las asignaciones de retiro en los miembros de la Fuerza Pública en los siguientes términos: *“Las asignaciones de retiro y las pensiones de que trata el presente decreto, se liquidarán tomando en cuenta las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para cada grado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de este Decreto. En ningún caso aquellas serán inferiores al salario mínimo legal.”*

2. A su vez, el numeral 3.13 del artículo 3 de Ley 923 del 2004 dispuso que: *“El incremento de las asignaciones de retiro y de las pensiones del personal de la Fuerza Pública será el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones de los*

miembros de la Fuerza Pública en servicio activo.” Disposición que sería reiterada en el artículo 42 del Decreto 4433 del 2004.

3. Que el accionante (causante e hijo de la señora Lucinda Morales de Losada), laboró al servicio del Ejército Nacional como Suboficial, quien fue dado de alta desde el 05 de septiembre de 1990, hasta el 26 de noviembre de 1996, fecha en la cual fue dado de baja por fallecimiento. El Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional reconoció a favor de los señores Lucinda Morales de Losada y Víctor Antonio Losada en resolución No. 10498 del año 1997, una asignación de retiro efectiva a partir del **26 de febrero de 1997**, que fuere liquidada con las siguientes partidas salariales: sueldo básico, prima de antigüedad, prima de actividad, subsidio familiar y prima de navidad.

4. Que el día **10 de octubre de 2018** la accionante, solicitó al Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional la reliquidación y reajuste de su asignación de retiro aplicando el incremento correspondiente sobre la base de liquidación para el computo de la pensión por sobrevivencia devengadas desde el momento de su reconocimiento.

5. Que mediante **Comunicado OFI 119-4611, de fecha 25 de enero de 2019**, el Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional le informó a la accionante que para prevenir el daño antijurídico y el detrimento patrimonial, la Entidad fijó como política la implementación de una estrategia, que dispuso la realización del reajuste porcentual del monto de las partidas salariales de las asignaciones de retiro de sus miembros que desde su génesis permanecieron fijas en la prestación reconocida, a través del mecanismo de conciliación, resolviendo el valor y procedimiento para la cancelación del IPC, para que posterior a esto se surta el trámite debido de legalidad. Renglón seguido le manifestaron que debía proceder a radicar solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación.

6. De conformidad con lo anterior, **el 02 de Agosto de 2020** el apoderado de la accionante solicitó conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación.

7. El **26 de Noviembre de 2020** se celebró audiencia virtual de conciliación extrajudicial ante el Procurador 135 Judicial II para asuntos Administrativos designado para el caso. La cual concluiría con el **Acuerdo Conciliatorio con radicación interna N° 437720/179-2020**.

La Conciliación:

El acuerdo de conciliación celebrado entre las partes pactó una fórmula de arreglo por la suma total de **“CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/Cte. (\$4.050.774.12)”**, y en los siguientes términos:

“El Comité de Conciliación por unanimidad autoriza conciliar de manera total, en forma integral con base en la formula desarrollada por la mesa de trabajo del Gobierno Nacional en materia de reconocimiento por vía de conciliación del Índice de Precios del Consumidor (I.P.C), (...):

- 1. Se reajustara la pensión a partir de la fecha de su reconocimiento aplicando el porcentaje más favorable entre el I.P.C y el principio de oscilación únicamente entre el periodo comprendido entre 1997 y 2004.*
- 2. El reconocimiento por concepto de capital obedece al 100% del valor diferencial entre la pensión debidamente reajustada y el valor pagado, desde la fecha certificada por prestaciones sociales, hasta cuando efectivamente se realice el reajuste en la nómina.*
- 3. La indexación será objeto de reconocimiento en un porcentaje del 75%*
- 4. Sobre los valores reconocidos se aplicaran los descuentos de Ley.*
- 5. Se aplicara la prescripción cuatrienal sobre las mesadas pensionales y los aportes, en las condiciones establecidas en la normatividad especial aplicaba a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.*
- 6. Se actualizara la base de liquidación a partir del mes de Enero del año 2005, con ocasión del reajuste obtenido hasta el año 2004”.*

Acuerdo conciliatorio que se compagina con los criterios establecidos por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad convocada, contenido en la **Sesión de fecha 20 de Noviembre de 2020**, allegada al presente acuerdo conciliatorio.

II. CONSIDERACIONES:

Para decidir acerca de la aprobación o improbación de la **Conciliación Extrajudicial con radicación interna N° 437720/179-2020, celebrada el veintiséis de (26) de noviembre de 2020**, el Despacho seguirá las orientaciones dadas en materia de conciliación por el Decreto 1818 de 1998¹ en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 23 de 1991 y 446 de 1998, ley 1285 de 2009 y 1395 de 2010, que exigen la revisión de los aspectos de procedibilidad y de legalidad.

PROCEDIBILIDAD:

Son conciliables las controversias susceptibles del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho², siempre y cuando reúnan los requisitos de forma y de fondo exigidos por las normas que regulan la materia, de conformidad con el numeral 6 del artículo 46 del decreto 1818 de 1998. Esto quiere decir, que además de acreditar los presupuestos, deben estar presentes todos los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 del 2011, y demás normas procesales para el reconocimiento del derecho reclamado³, entre estos, la disponibilidad del derecho, el agotamiento de la actuación administrativa, la exigibilidad del derecho y el sustento probatorio.

1. El Carácter Particular y Patrimonial del Asunto: El presente caso se trata de una controversia integrada por dos extremos, de un lado el Ministerio de Defensa Nacional en condición de entidad convocada y de otro lado la señora **LUCINDA**

¹ “Por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.”

² Lo dice el Art. 59 de Ley 23 de 1991 modificado por el Art. 70 de la Ley 446 de 1998, repetido en Art. 56 del Decreto 1818 de 1998,

³ Según el Art. 61 de la Ley 23 de 1991 modificado por el Art. 81 de la Ley 446 de 1998 y reiterado en el Art. 63 del Decreto 1818 de 1998.

MORALES DE LOSADA en su condición de convocante, quienes pretenden conciliar las diferencias salariales producto de la no aplicación del IPC sobre las partidas salariales de la asignación de retiro.

Ahora bien, en este asunto no se discute la titularidad del derecho del accionante, toda vez, que desde el año 2020 se vienen efectuando los reajustes de las asignaciones del personal retirado de la entidad, únicamente se discute el derecho económico de libre disposición sobre las mesadas causadas no pagadas de conformidad con el incremento del IPC. Es por ello, que el asunto es de carácter particular y patrimonial y puede ser objeto de conciliación.

2. El Agotamiento de la Actuación Administrativa: La convocante radicó petición ante el Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional el día **10 de Octubre de 2018**, solicitando el reconocimiento y pago de las sumas de dinero correspondiente a las diferencias generadas al no haber aplicado el incremento del IPC sobre las partidas salariales que comportan su asignación de retiro.

Frente a esta solicitud, el Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, mediante **Comunicado OFI 119-4611, de fecha 25 de enero de 2019**, manifestó que la Entidad fijó como política la implementación de una estrategia, que dispuso la realización del reajuste porcentual del monto de las partidas salariales de las asignaciones de retiro de sus miembros que desde su génesis permanecieron fijas en la prestación reconocida, esto a través del mecanismo de conciliación, resolviendo el valor y procedimiento para la cancelación del IPC.

Con lo anterior, se encuentra probado que la actora activó la actuación administrativa a través de un derecho de petición de interés particular y que de este nació una respuesta que no concedió recursos en vía administrativa, por lo que se encuentra que el convocante agotó el requisito previo de procedibilidad.

3. Caducidad de la Acción: No hay lugar a declarar la caducidad de la acción, por cuanto las reclamaciones que efectúa la accionante recaen sobre prestaciones de carácter periódico que son devengadas mes a mes y están exentas de dicho control. Esto de conformidad con la regla de atemporalidad establecida en el literal “c” del numeral 1 del artículo 164 de la Ley 1437 del 2011.

4. Poder para Conciliar: Durante el trámite conciliatorio y el acuerdo celebrado entre las partes, se hizo presente el apoderado de la parte accionante el **Dr. Julián Andrés Gaitán Reyes**, identificado con la CC. No. 14.398.333 y T.P. 179. 260 del C.S.J., y la apoderada de la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL, la **Dra. Eilen Maryaan Barrera Vargas**, identificada con la CC. No.53.065.677 y T.P No. 200.428 del C.S.J.

Quienes se encontraban facultados para conciliar tal como obra a folios 16 a 17 y folios 28 a 34 respectivamente del archivo principal digital, con el lleno de los requisitos establecidos en los artículos 74 y ss del C.G.P y lo establecido en el artículo 5º del Decreto Ley 806 del 2020.

Por lo anterior, encuentra el Despacho que las partes que celebraron el acuerdo conciliatorio se encontraban plenamente facultadas para disponer de los derechos objeto de este litigio y que las misma se realizó de conformidad con la fórmula de arreglo propuesta por el comité de conciliación del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional.

5. Las pruebas⁴: El acuerdo conciliatorio tiene como soporte los siguientes documentos:

- Solicitud de Conciliación Extrajudicial elaborada por el apoderado de la convocante (fls. 2 a 5 del Archivo Principal Digital).

- Resolución N° 10498 de 1997, a favor de los señores Lucinda Morales de Losada y Víctor Antonio Losada, por la cual se reconoce y ordena el pago de prestaciones sociales consolidadas por el retiro del Sargento Segundo (póstumo) del Ejército Nacional. (fls. 6 a 10 del Archivo Principal Digital).

- Solicitud de reajuste sobre base de liquidación para el computo de la pensión de sobrevivencia de fecha 10 de octubre de 2018. (fls. 11 a 14 del Archivo Principal Digital).

- Oficio N° 119-4611 del 25 de enero de 2019 por medio de la cual se da cumplimiento de fallo a la convocante ordenado por el Juzgado Administrativo Oral del Circuito Judicial 38 de Bogotá, por violación al derecho fundamental de petición de la señora Lucinda Morales de Losada. (fls. 15 a 16 del Archivo Principal Digital).

- Conciliación extrajudicial con Radicado N° 437720/179-2020, celebrada el 26 de noviembre. (fls. 17 a 18 del Archivo Principal Digital).

- Resolución N° 30 de 2013 por medio de la cual se adopta una delegación de funciones relacionadas con la defensa judicial. (fls. 35 a 39 del Archivo Principal Digital).

- Oficio N° 20-042 del 20 de noviembre de 2020 suscrita por la secretaria técnica del comité de conciliación y defensa judicial. (fls. 40 a 41).

- Reajustes realizados sobre la mesada pensional dando aplicación al principio de oscilación desde 1998 hasta el 31 de octubre de 2020, así mismo las mesadas

⁴ De acuerdo al Art. 60 de la Ley 23 de 1991 modificado por el Art. 80 de la Ley 446 de 1998.

reajustadas con base en el IPC, desde el año 1998 a Octubre de 2020. (fls. 42 a 47 del Archivo Principal Digital).

LEGALIDAD:

Con el fin de determinar si el acuerdo conciliatorio contenido en el Acta de **Conciliación Extrajudicial con radicación N° 437720/179-2020, celebrada el veintiséis de (26) de noviembre de 2020, ante el Procurador 135 Judicial II para Asuntos Administrativos** (fls 21 a 25 del Archivo Principal) se ajusta a la Constitución y la Ley, se procederá a estudiar el fondo del asunto pactado.

III. SITUACIÓN JURÍDICA GENERAL

En la Constitución de 1991, a través de los Arts. 217 y 218, se determinó que el régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública fuera de carácter especial, entre otras razones por la naturaleza del servicio prestado al Estado, y según el Art. 150 numeral 19, literal e), del Estatuto Superior, en forma concurrente corresponde al Legislador y al Ejecutivo Nacional fijar dicho régimen, así: el Congreso señala los objetivos y criterios generales y el Gobierno Nacional los desarrolla por medio de los actos administrativos.

Atendiendo a tales postulados, el Congreso profirió la Ley 4ª de 1992, destacándose el siguiente enunciado:

"ARTICULO 13. En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional establecerá una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza Pública de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2o.

PARAGRAFO. La nivelación de que trata el presente artículo debe producirse en las vigencias fiscales de 1993 a 1996."

Por su parte, el Gobierno Nacional en cumplimiento de esta directriz, a partir del 1º de enero del año 1996, señaló la escala gradual porcentual que debía regir cada año, a través de los Decretos 107/96, 122/97, 58/98, 62/99, 2724/00, 2734/01, 745/02, 3552/03 y 4158/04.

Dicha escala se entiende que acoge el principio de oscilación reglamentado por los Decretos 1211, 1212 y 1213 de 1990, del cual tratan específicamente los artículos 169, 151 y 110 de tales decretos respectivamente, y cuya redacción se realizó en idénticos términos con algunas salvedades, así:

OSCILACION DE ASIGNACIONES DE RETIRO Y PENSIONES. *Las asignaciones de retiro y las pensiones de que trata el presente Decreto, se liquidarán tomando en cuenta las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para cada grado y de conformidad (...). En ningún caso aquéllas serán inferiores al salario mínimo legal. Los Oficiales y Suboficiales (Agentes) o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas que regulen ajustes prestacionales en otros sectores de la Administración Pública, a menos que así lo disponga expresamente la Ley.*

PARAGRAFO. *Para la oscilación de las asignaciones de retiro y pensiones de Oficiales Generales y Coroneles, se tendrá en cuenta como sueldo básico, el porcentaje que como tal determinen las disposiciones legales vigentes que regulen esta materia, más las partidas señaladas en el art. (...).* (Nota: este párrafo no se haya en el Decreto 1213 y la parte entre paréntesis son los términos diferentes excluidos).

Bajo la órbita del principio mencionado se ha entendido que los incrementos introducidos en los factores salariales del personal activo repercuten en las prestaciones periódicas de los miembros retirados, es decir, el reajuste opera automáticamente cuando se altera la remuneración de los oficiales, suboficiales y agentes al servicio del Estado.

Con base en el marco expuesto, la entidad ha procedido anualmente a reajustar y pagar los beneficios prestacionales a su cargo, sin contemplar la posibilidad de acudir a otros estatutos, porque expresamente lo prohíbe la Ley 4ª de 1992, en los siguientes términos:

"ARTÍCULO 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos."

Así las cosas, a primera vista podría afirmarse que la administración ha actuado conforme a derecho al aplicar la normatividad referenciada cuando realiza el reajuste anual de las asignaciones de retiro, sin tomar en cuenta los incrementos decretados por IPC para las pensiones de los otros sectores, por ser extraña a los preceptos citados, vale decir, por no hacer parte del régimen especial de la Fuerza Pública. Sin embargo, excepcionalmente el Legislador dentro de su potestad de configuración de los derechos puede extender los beneficios de un régimen general o uno más especial, siempre y cuando se encuentre ajustado a la Constitución.

En efecto, encuentra el Despacho que por medio de la Ley 238 de 1995 se adicionó el Art. 279 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de conceder los beneficios establecidos en los artículos 14 y 142 del sistema general de seguridad social integral a la Fuerza Pública.

Inicialmente, la Ley 100 de 1.993 había dictaminado que:

Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de la Fuerza Pública.

(...)

Posteriormente, la Ley 238 de 1995, expresó:

"ARTÍCULO 1o. Adiciónese al artículo 279 de la Ley 100 de 1993, con el siguiente párrafo:

"Parágrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados".

ARTÍCULO 2o. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias."

El Art. 14 citado en la norma transcrita dice:

"Artículo 14. Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el 1 de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno."

Dentro del contexto anterior, de las normas enunciadas en precedencia, aparentemente surge un conflicto entre el reajuste que obra por el principio de oscilación y el que procede conforme al IPC, pero tal parecer no tiene asidero, pues examinada la materia se deduce que ambos mecanismos funcionan en forma armónica y complementaria; vale anotar, la aplicación no es excluyente o contradictoria sino preferencial o sustitutiva dependiendo del punto de vista del observador.

Veamos, a la entidad le corresponde efectuar el reajuste de la prestación que sea más favorable para el servidor público, conforme a la normatividad vigente, así, el administrador en primer lugar aplicará en la liquidación las normas de carácter especial que para cada anualidad expide el Gobierno Nacional y que desarrollan el principio de oscilación, y luego, realiza la misma liquidación con base en el indicador del DANE, al comparar los resultados arrojados por cada vía mencionada, se aplicará el reajuste que resulte mayor, que sustituye al que resulte menor, vale reiterar, se escoge la más favorable para el servidor público en términos de la cuantía del reajuste. ⁵

De esta forma, se recogen las directrices de la Corte Constitucional consignadas en la Sentencia C - 941 de 2003 que declaró exequible el principio de oscilación como sistema de reajuste de la asignación de retiro, haciendo la salvedad que en cuanto a la posición de la Corte Constitucional asumida en esa providencia en el sentido de que la asignación de retiro no era comparable a las pensiones, fue corregida posteriormente, mediante Sentencia C - 432 de 2004 cuando indicó que la naturaleza de esa prestación era pensional, entonces, bajo tal entendido es admisible también, aplicar el mandato de la Ley 238 de 1995, en forma alternativa al principio de oscilación en los términos ya consignados en precedencia.

Esta fórmula de estudio, entre el incremento anual de las asignaciones de retiro conforme al principio de oscilación y el IPC, operó durante el tiempo posterior a la expedición de la Ley 238 de 1995 y hasta la expedición del Decreto 4433 de 2004, el cual corrigió el desequilibrio en el reajuste anual de las asignaciones de retiro según el principio de oscilación teniendo en cuenta las asignaciones de los oficiales y

suboficiales en actividad y en adelante prohíbe acogerse a normas que regulen ajustes para la administración pública, a menos que así lo regule expresamente la Ley, asunto tratado por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, expediente Acción de Tutela 2011-00725 del 27 de julio de 2011.

Aquellas partidas computables ya reseñadas, fueron ratificadas por el Decreto 4433 de 2004 *“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública”* que son aplicables para los reconocimientos de asignaciones de retiro, pensiones de invalidez y pensiones de sobrevivientes.

Bajo la órbita del principio mencionado, la jurisprudencia Contencioso Administrativa ha entendido que **los incrementos introducidos en los factores salariales del personal activo repercuten en las prestaciones periódicas de los miembros retirados**, es decir, el reajuste que efectúe el Gobierno Nacional sobre las asignaciones de los miembros activos de la Fuerza Pública; Oficiales, Suboficiales, Agentes y Miembros del Nivel Ejecutivo, repercute a favor de sus miembros retirados.

Con base en el marco expuesto, la entidad debe proceder anualmente a reajustar y pagar los beneficios prestacionales a su cargo, sin la posibilidad de acudir a otros estatutos. Así expresamente lo señala la Ley 4 de 1992, en los siguientes términos:

"ARTÍCULO 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos."

Bajo este entendido, es ineludible establecer que las partidas que componen la asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública deben reajustarse anualmente de conformidad con los incrementos que se realicen para el personal activo, por cuando sus valores no pueden mantenerse estáticos durante el paso del tiempo. En este sentido, las partes pueden presentar los acuerdos respectivos ante el Juez de conocimiento con el objeto de evitar un proceso judicial y corregir los errores dilucidados.

En el presente caso se observa que entre el año de efectividad de la pensión de sobrevivencia reconocida a los señores señores Lucinda Morales de Losada y Víctor Antonio Losada padres del causante, en el **año 1997, y hasta el año 2004, no se aplicó el porcentaje más favorable entre el I.P.C y el principio de oscilación**, dejando en evidencia que la pensión de sobrevivencia de la señora Lucinda Morales de Losada (a quien en el año 2006 se le reconoció el 100% de la prestación por muerte del señor Víctor Antonio Losada) fue reajustada en un porcentaje inferior al Índice de Precios del Consumidor del año inmediatamente anterior.

A lo que se suma, que al no haberse aplicado el porcentaje más favorable entre el I.P.C y el principio de oscilación para el grado de Sargento Segundo entre los años 1997 y 2004, estos valores repercutieron en las mesadas pensionales percibidas por la actora en los años subsiguientes. Consecuencia a lo anterior, la entidad accionada reconoce

la totalidad de las diferencias prestacionales en el periodo comprendido entre el 23 de enero de 2015 (al aplicarse la prescripción cuatrienal desde la fecha en la cual se radicó la petición) y hasta el 31 octubre de 2020 (fecha para la cual se efectuó el respectivo reajuste como lo certificó el Ministerio de Defensa Nacional); valores reconocidos que se reflejan en la siguiente tabla liquidataria realizada por la entidad:

MORALES DE LOSADA LUCINDA				C.C. No. 26.439.782		
DIFERENCIAS A PARTIR DEL 23 DE ENERO 2015 HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2020						
AÑO	PENSION MENSUAL CANCELADA	PENSION MENSUAL AJUSTADA IPC	DIFERENCIA MENSUAL	TOTAL MESES	TOTAL DIAS	TOTAL DIFERENCIA
2015	759.660	800.234	40.574	13	8	538.288
2016	818.686	862.413	43.727	14		612.179
2017	873.947	920.625	46.679	14		653.501
2018	918.431	967.485	49.055	14		686.764
2019	959.760	1.011.022	51.262	14		717.669
2020	1.008.900	1.062.787	53.887	11		592.753
				TOTAL		3.801.154

(fol. 47 Archivo Principal Digital)

Lo anterior evidencia que en efecto el Ministerio de Defensa Nacional- área de nómina del grupo de prestaciones sociales de la Dirección Administrativa, no ha aplicado para la pensión reconocida el porcentaje más favorable entre el I.P.C y el principio de oscilación entre el periodo comprendido entre 1997 y 2014, según expone el apoderado de la convocante. Afectando de esta forma el poder adquisitivo de la asignación de retiro de la convocante y contraviene las normas legalmente aplicables al asunto.

De este modo, queda claro que la entidad procede a calcular las diferencias adeudadas en forma indexada en la suma de **\$4.050.774.12**, valor que corresponde a los 4 años anteriores (prescripción cuatrienal) a la presentación de la petición de agotamiento de la actuación administrativa, teniendo en cuenta el 100% del capital y el 75% de la indexación (valor obtenido de sumar el 100% del capital más el 75% de indexación de acuerdo a la liquidación efectuada por la entidad); en esta medida el acuerdo conciliatorio adelantado se ajusta a derecho, al haberse liquidado en debida forma la prestación otorgada mediante Resolución 10498 de 1997, reconociendo el 100% del capital más un 75% de indexación.

Por lo anterior, las partes únicamente dispusieron del 75% de indexación y condicionaron el pago dentro de los 6 meses siguientes a la radicación de la cuenta de cobro con los documentos pertinentes en la Entidad, tiempo en el cual no habrá lugar al pago de intereses. Derechos que son de libre disposición por parte de su titular al ser estos de carácter puramente económicos.

De igual manera, la entidad da aplicación a la prescripción cuatrienal contemplada en el artículo 74 del Decreto 1211 de 1990, tal y como lo reitera en Sentencia de 4 de febrero de 2010, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, radicación N° 1238-

2009; reconociendo únicamente las diferencias indexadas en el periodo comprendido entre el **23 de enero de 2015, hasta el 31 de octubre de 2020**, por lo que los valores reconocidos no representan un detrimento patrimonial para el Estado.

En este sentido y observando, primero, el cumplimiento de los requisitos del artículo 56 del artículo 1818 de 1998, y segundo, que este acuerdo no constituye un deterioro al patrimonio público, este despacho indica que las partes sí pueden conciliar, total o parcialmente el objeto del litigio por tratarse de un tema de contenido económico y de libre disposición que se ajusta a la Ley.

Por lo expuesto, el **JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA, SECCION SEGUNDA**,

IV. R E S U E L V E:

PRIMERO: APROBAR la conciliación extrajudicial consignada en el acta de Conciliación Extrajudicial con radicación N° 437720/179-2020, celebrada el veintiséis (26) de Noviembre de 2020 ante el Procurador 135 Judicial II para Asuntos Administrativos (fls 21 a 25 del Archivo Principal Digital), entre la Señora Lucinda Morales de Losada identificada con CC. No. 26.439.782 por conducto de su apoderado judicial, el Dr. Julián Andrés Gaitán Reyes, identificado con la CC. No. 14.398.333 y T.P 179.260 y el apoderado de la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL, de conformidad con la propuesta de conciliación del Comité de conciliación de la entidad contenida en Sesión del 20 de Noviembre de 2020.

SEGUNDO: La Dirección Administrativa del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, dará cumplimiento al presente acuerdo en los términos señalados en la Sesión del 20 de Noviembre de 2020, expedida por la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial y la respectiva acta de liquidación que le acompaña (fls 42 a 47 del Archivo Principal Digital).

TERCERO: En firme este proveído, por secretaría **COMUNÍQUESE** a la Dirección Administrativa del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional para efectos de su ejecución y cumplimiento.

CUARTO: Conforme al artículo 105 de la Ley 446 de 1998, se da por terminado el presente proceso.

QUINTO: Cumplido lo anterior, archívense las diligencias, previas las constancias que fueren menester.

SEXTO: El presente acuerdo conciliatorio hace tránsito a Cosa Juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo, conforme al artículo 66 de la Ley 446 de 1998.

SÉPTIMO: Sin costas en razón a que han llegado a un acuerdo conciliatorio.

OCTAVO: Expídanse copias de la presente providencia a las partes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 114 del Código General del Proceso.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE


ROSSE MAIRE MESA CEPEDA
JUEZ

DMR